

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO SESENTA Y CUATRO (64) ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ - SECCIÓN TERCERA

Bogotá, D. C., veintiuno (21) de junio de dos mil veintiuno (2021)

JUEZ	:	Magda Cristina Castañeda Parra
Ref. Expediente	:	11001334306420190038900
Demandante	:	Stevens Edurado Rodríguez Zuluaga
Demandado	:	NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL

AUTO APRUEBA CONCILIACIÓN JUDICIAL

OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO

Procede el Juzgado a resolver sobre la aprobación de la conciliación lograda entre la **Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional** y el señor **Stevens Eduardo Rodríguez Zuluaga**.

I. ANTECEDENTES

El señor **Stevens Eduardo Rodríguez Zuluaga**, a través de apoderada judicial, radicó el día 5 de diciembre de 2019, demanda dentro del medio de reparación directa contra la **Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional** (fl.76), admitida mediante auto del 17 de septiembre de 2020 (fl. 78-80), notificada en debida forma a la parte demandada el día 9 de septiembre de 2020 (fl. 87-90).

El día 1 de diciembre de 2020, la parte demandada contestó la demanda dentro del término legal para hacerlo (fl. 91-92)

A través de correo electrónico remitido al Despacho el 3 de marzo de los cursantes, la parte demandada aportó propuesta conciliatoria dentro del presente asunto (fl.96-97), la que fue aceptada

íntegramente por la parte actora, mediante correo del 9 de marzo del hogaño (fl. 98-99).

II.-HECHOS Y PRETENSIONES DE LA DEMANDA

2.1. Hechos

La situación fáctica se sintetiza de la siguiente manera:

2.1. El Soldado regular **STEVENS EDUARDO RODRÍGUEZ ZULUAGA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.024.593.086 de Bogotá, ingresó al Ejército Nacional a prestar su servicio militar obligatorio en fecha mayo 01 de 2017 y hasta el octubre 31 de 2018, adscrito al Batallón de Selva No. 52 "CR. JOSÉ DOLORES SOLANO", ubicado en el departamento de Vaupés. (Hecho visible en constancia de tiempo de servicio militar cumplido)

2.2. En virtud de los exámenes médicos practicados al señor Rodríguez Zuluaga, previos al acuartelamiento, se advierte que ingresó al Ejército Nacional, en excelentes condiciones de salud y fue declarado apto para la prestación del servicio militar obligatorio.

2.3. El demandante durante la prestación del servicio militar obligatorio, padeció de la enfermedad de **LEISHMANIASIS CUTÁNEA**, y una vez notificado en 25/07/2018 de dicha situación, se le suministró el siguiente tratamiento, con el medicamento denominado GLUCANTIME, el cual fue prescrito para aplicación de 114 ampollas, durante un periodo de 29 días.

Se señala que la aludida enfermedad parasitaria, generó lesiones ulcerosas en la piel como signo de alarma clínico, que dejó como secuela cicatrices en el cuerpo con defecto estético. La lesión fue calificada por los galenos de la Junta Médica Laboral, en el servicio por causa y razón del mismo. (Hecho visible en certificado SIVIGILA y Acta de Junta Médica Laboral)

2.4. Mediante Orden Administrativa de Personal No. 2065 de fecha octubre 31 de 2018, el Director de Personal del Ejército Nacional ordenó el desacuartelamiento del Soldado Regular RODRIGUEZ ZULUAGA, por haber cumplido con el tiempo de servicio militar obligatorio. (Hecho visible en OAP)

2.5. En fecha enero 30 de 2019, la Dirección de Sanidad militar expidió certificado de tratamiento SIVIGILA por Leishmaniasis, en el que se observa la fecha de notificación de la enfermedad, la dosis de medicamento suministrada y los días de duración del tratamiento. (Hecho visible en certificado SIVIGILA No. 020869)

2.6. En fecha diciembre 07 de 2018, la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, le realizó Junta Médica Laboral, dictaminándole incapacidad permanente parcial y una disminución de la capacidad laboral del diez punto cinco por ciento (10.5%). (Hecho visible en Acta de Junta Médica Laboral No. 105128)

2.7. Como bien se evidencia del Acta de Junta Médica Laboral, el daño sufrido por el soldado regular fue ocasionado en el servicio por causa y razón del mismo, y por tal razón, fue catalogada como una calificación establecida en el liberal B), es decir, **como consecuencia de las actividades propias de la prestación del servicio militar obligatorio.**

2.8. Se registró igualmente que el 18 de junio de 2019, el joven RODRÍGUEZ ZULUAGA, radicó ante el Secretario General del Ministerio de Defensa, renuncia a convocar Tribunal Médico de Revisión Militar y términos de ejecutoria. (Hecho visible en oficio radicado)

2.9. El joven **RODRIGUEZ ZULUAGA** terminó de prestar su servicio militar según constancia de tiempo de servicios, el **31 de octubre de 2018**, fecha para la cual ya había sido diagnosticado con **LEISHMANIASIS CUTÁNEA**, por parte de médicos de las fuerzas militares. Por lo anterior, concluye el libelista que fue contagiado mientras se encontraba prestando su servicio militar obligatorio. (Hecho visible en Constancia de tiempo de servicio y Certificado SIVIGILA)

2.2.- PRETENSIONES

Con fundamento en los hechos, solicitó se accediera a las siguientes pretensiones:

“2.1. Declarar que **LA NACIÓN COLOMBIANA – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL**, es administrativa y patrimonialmente responsable por las lesiones que padece el señor **STEVENS EDURADO RODRÍGUEZ ZULUAGA**, ocasionadas durante la prestación de su servicio militar obligatorio.

2.2. Declarar que **LA NACIÓN COLOMBIANA – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL** es administrativa y patrimonialmente responsable de los perjuicios materiales e inmateriales causados, por los hechos a que se contrae esta demanda, al señor **STEVENS EDURADO RODRÍGUEZ ZULUAGA**, a quien represento legalmente.

2.3. Que como consecuencia de la anterior declaración se condene a **LA NACIÓN COLOMBIANA – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL**, a indemnizar los perjuicios morales, por daño a la salud y materiales a mi poderdante las siguientes sumas de dinero:

-Perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante consolidado, la suma de **\$2.551.941,07 M/Cte.**

-Perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante futuro, la suma de **\$41.169.902,42 M/Cte.**

-Perjuicios morales la cantidad de **20 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes**, cuya distribución se observa en el juramento estimatorio.

-Perjuicio por daño a la salud de **20 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes.**

2.4. Solicito que la condena respectiva se actualice de conformidad con lo previsto en el art. 192 del C.P.A.C.A y se reconozcan los intereses legales más la corrección monetaria desde la fecha de ocurrencia de los hechos hasta cuando se le dé cabal cumplimiento a la sentencia que le ponga fin al proceso.

2.5. Que como consecuencia de la primera declaración se condene en costas y agencias en derecho a **LA NACIÓN COLOMBIANA – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL**".

III. ACUERDO CONCILIATORIO

El 3 de marzo de 2021, a través de correo electrónico remitido a este Despacho, la parte demandada manifestó su intención de conciliar el presente asunto, para lo cual allegó certificación de la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Defensa Nacional, de fecha 26 de febrero de 2021, en el que da cuenta que el Comité autorizó conciliar bajo los siguientes parámetros: (fl. 96-97)

“PERJUICIOS MORALES

*Para **STEVENS EDURADO RODRÍGUEZ ZULUAGA** en calidad de lesionado, el equivalente en pesos a 16 salarios Mínimos Legales Mensuales.”*

Por daño a la salud y por perjuicios materiales, el mencionado Comité no autorizó realizar ofrecimiento alguno.

A través de correo electrónico de fecha 09 de marzo de 2021, la parte actora a través de su apoderada judicial, aceptó la propuesta conciliatoria en los siguientes términos: “ *teniendo en cuenta que la parte demandada mediante correo electrónico enviado el 4 de marzo de 2021, presento y surtió el traslado de la certificación que autorizó conciliar de manera total, manifiesto a su Señoría que **Si me asiste ánimo conciliatorio y acepto en su totalidad el pago ofrecido por concepto de perjuicios morales a favor del demandante, el equivalente en pesos a 16 salarios mínimos legales mensuales vigentes.*** (fl. 98-99)

IV. PRUEBAS OBRANTES EN EL PLENARIO

Con la conciliación prejudicial, se aportaron las siguientes pruebas documentales:

- 4.1 Constancia de tiempo de servicio militar cumplido del 01 de mayo de 2017 al 31 de octubre de 2018 (fl. 26)
- 4.2. Orden Administrativa de Personal No. 2065 del 31 de octubre de 2018, a través de la que se desacuartelan soldados orgánicos del 02C-2017, por tiempo de servicio militar cumplido, entre ellos el SLR STEVENS EDURADO RODRÍGUEZ ZULUAGA (fl. 26-28)
- 4.3. Certificado de tratamiento SIVIGILA No. 020869, que da cuenta del diagnóstico de leishmaniosis cutánea realizado al señor STEVENS EDURADO RODRÍGUEZ ZULUAGA el 27 de julio de 2018 (fl. 29)
- 4.4. Acta de Junta Médica Laboral No. 105128 d 7 de diciembre de 2018, realizada al SLR STEVENS EDURADO RODRÍGUEZ ZULUAGA (fl. 30-31), con oficio de renuncia a convocar el Tribunal médico y términos de ejecutoria. (fl. 32)
- 4.5. Historia clínica señor STEVENS EDURADO RODRÍGUEZ ZULUAGA (fl. 37-73)
- 4.6. Copia de la Cédula de ciudadanía del señor STEVENS EDURADO RODRÍGUEZ ZULUAGA. (fl. 99 vto)

V. PRESUPUESTOS PARA LA APROBACIÓN DEL ACUERDO.

En ese orden de ideas, se exponen los fundamentos legales y jurisprudenciales a los cuales debe ajustarse el acuerdo logrado por las partes.

En aplicación del artículo 70, 73 y 81 de la Ley 446 de 1998, y la Ley 640 de 2001 (par. 3º art. 1), para la aprobación de un acuerdo conciliatorio sometido al conocimiento del juez de lo contencioso administrativo, deben coincidir los siguientes presupuestos:

- La formulación de solicitud de conciliación por intermedio de abogado titulado ante el conciliador competente.
- Las personas jurídicas de derecho público deben conciliar a través de sus representantes legales, autorizados debidamente por el Comité de Conciliación y sobre conflictos de carácter particular y contenido patrimonial.
- Que no hubiere operado el fenómeno de la caducidad respecto de la acción ordinaria establecida por la vía judicial para dirimir el conflicto que se pretende conciliar.
- El acuerdo conciliatorio estará soportado con las pruebas necesarias.
- El acuerdo no debe contrariar la ley ni resultar lesivo para el patrimonio público.

En consideración de los supuestos normativos precedentes, el Despacho entrará verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la aprobación del acuerdo conciliatorio bajo examen.

VI.- VERIFICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARA LA APROBACIÓN DEL ACUERDO.

1. Solicitud de conciliación presentada por intermedio de abogado titulado ante el conciliador competente.

En el sub-lite, la parte demandante, señor STEVENS EDURADO RODRIGUEZ ZULUAGA otorgó poder a la abogada HELIA PATRICIA ROMERO RUBIANO, por medio del cual se le facultó expresamente para conciliar, conforme al poder visible a folio 23 del plenario.

Por su parte, la demandada **NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA- EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA**, actuó a través de su apoderado

Dra. **Zulma Yadira Sanabria Uribe**, quien está debidamente facultada para conciliar, conforme al poder contenido en el CD visible a folio 91.

2.- Capacidad y representación de las personas jurídicas de derecho público y autorización del Comité de conciliación de la entidad.

A la luz del artículo 159 y 160 de la Ley 1437 de 2011, en especial el artículo 70 de la Ley 446 de 1998 que dispone que podrán conciliar, total o parcialmente, en las etapas prejudicial o judicial, las personas jurídicas de derecho público, a través de sus representantes legales o por conducto de apoderado y los artículos 53 y 54 del Código General del Proceso, señala que tiene capacidad para hacer parte, las personas que puedan deponer de sus derechos y las demás deberán comparecer por intermedio de sus representantes o debidamente autorizadas por estos.

En el presente asunto, la demandada **NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA- EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA** confirió poder a la doctora **Zulma Yadira Sanabria Uribe**, facultándola para conciliar en el presente asunto.

Debe precisar el Despacho que el Ministerio de Defensa - Ejército Nacional fue la entidad convocada en la presente actuación y el Comité de Conciliación de la mencionada entidad autorizó conciliar con la parte demandante, el reconocimiento de indemnización por perjuicios ocasionados a la víctima directa, en los términos establecidos en la certificación suscrita por la Secretaría Técnica del Comité, de fecha 26 de febrero de 2021, visible a folio 97 del plenario.

De conformidad con lo antes expuesto, el Despacho encuentra que el presente acuerdo cumple con los requisitos establecidos en los artículos 53 y 54 del C.G. P., los artículos 1, 2, 3, 56, 60, 63 y 67 del Decreto 1818 de 1998 y Decreto 1716 del 2009, pues las partes conciliantes son capaces para ejercer derechos y contraer obligaciones, fueron debidamente representadas y el asunto es susceptible de conciliación.

3.- Que no haya operado la caducidad

Al tenor de lo previsto en el literal i) del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el término para ejercer la acción contencioso administrativa a través del ejercicio del medio de control de reparación directa, es de dos (2) años contados desde el día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión

u operación administrativa.

En el presente caso, los hechos corresponden al **25 de julio de 2018**, fecha en la que el soldado regular STEVENS EDURADO RODRIGUEZ ZULUAGA, fue diagnosticado con leishmaniosis cutánea, conforme al certificado de SIVIGILA visible a folio 29 del plenario.

En ese orden de ideas, en el sublite el plazo para acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo venció el **26 de julio de 2020**. Teniendo en cuenta que la demanda fue presentada el 19 de diciembre de 2019 (fl. 76), el Despacho encuentra que no ha vencido el término de caducidad del medio de control.

Adicionalmente, debe tenerse presente que se cumplió con el requisito de procedibilidad para acudir ante la jurisdicción, (Ley 640 de 2001, en concordancia con el artículo 42 A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009).¹ El término para incoar la demanda se suspendió desde el momento en que se presentó la conciliación prejudicial hasta que se agotó la misma (20 de junio de 2019 al 13 de agosto de 2019), como lo establece el artículo 21 de la Ley 640 de 2001².

4.- Naturaleza particular del conflicto y contenido patrimonial.

Encuentra el Despacho que el acuerdo conciliatorio sometido a consideración reviste un contenido patrimonial en tanto pretende precaver el conflicto originado por la responsabilidad administrativa del Ministerio de Defensa Nacional junto con la indemnización por los perjuicios causados al demandante STEVENS EDURADO RODRÍGUEZ ZULUAGA a consecuencia de la afección adquirida- leishmaniosis cutánea, cuando prestaba el servicio militar obligatorio, lo que conllevó a la pérdida de su capacidad laboral.

5.- Medios probatorios que soportan el acuerdo conciliatorio.

¹“Adicionado por el art. 13, Ley 1285 de 2009, así: Conciliación judicial y extrajudicial en materia contencioso-administrativa. A partir de la vigencia de esta ley, cuando los asuntos sean conciliables, siempre constituirá requisito de procedibilidad de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo o en las normas que lo sustituyan, el adelantamiento del trámite de la conciliación extrajudicial.”

²“Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que éste trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2 de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable”.

En el presente caso, a partir de la certificación de tiempo de servicios del Soldado Regular Stivens Edurado Rodríguez Zuluaga, de fecha 15 de marzo de 2019, se acreditó que el citado, ingresó a prestar su servicio militar obligatorio en el Ejército Nacional, el día 1 de mayo de 2017 y culminó el 31 de octubre de 2018 (fl. 26)

Conforme a la ficha de notificación de datos básicos elaborada por el Sistema Nacional de vigilancia en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud, se establece que al demandante fue diagnosticado con Leishmaniosis cutánea el 25 de julio de 2018, (fl. 56vo) y que en razón a ello, la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional a través del Dispensario Médico de Oriente, le suministró la atención médica para el tratamiento de la enfermedad conforme a la historia clínica aportada y visible a folios 37 a 73 del expediente. Como consecuencia de ello, se vio disminuida su capacidad laboral, en un porcentaje del 10.5%, conforme concluyó el acta de junta médico laboral No 105128 del 7 de diciembre de 2018 (fl. 30-31).

En cuanto a la imputabilidad, el acta de Junta Médico Laboral No 105128, determinó: " (...) **D.. Imputabilidad del Servicio AFECCIÓN- 1 SE CONSIDERA ENFERMEDAD PROFESIONAL. LITERAL (B) (EP)**".

A la luz de los hechos probados dentro de la presente actuación, es preciso señalar en primer lugar que el H. Consejo de Estado ha previsto que *"cuando una persona ingresa al servicio militar obligatorio en buenas condiciones de salud debe dejar el servicio en condiciones similares, criterio a partir del cual se estableció la obligación de reparación a cargo de la entidad demandada, frente a los daños cuya causa esté vinculada con la prestación del servicio y excedan la restricción de los derechos y libertades inherentes a la condición de militar"*.

Agregó la Máxima Corporación, *"Atendiendo a las condiciones concretas en las que se produjo el hecho, la Sala ha aplicado en la solución de los casos, los distintos regímenes de responsabilidad. Así, ha decidido la responsabilidad del Estado bajo el régimen de daño especial cuando el daño se produjo como consecuencia del rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas³ ; el de falla*

³ En sentencia de 10 de agosto de 2005, exp: 16.205, la Sala al resolver la demanda instaurada con el fin de obtener la indemnización de los perjuicios causados por las lesiones sufridos por un soldado, quien en cumplimiento de la orden proferida por su superior jerárquico, de realizar un registro de área en horas de la noche, al saltar un caño se cayó y golpeó contra una piedra, consideró: *"...la causación de los daños material, moral y a la vida de relación tienen sustento, en este proceso, en el actuar de la*

probada cuando la irregularidad administrativa produjo el daño y, el de riesgo cuando éste proviene o de la realización de actividades peligrosas o de la utilización de artefactos que en su estructura son peligrosos⁴ ; pero, en todo caso, ha considerado que el daño no será imputable al Estado cuando se haya producido por culpa exclusiva de la víctima, por fuerza mayor o por el hecho exclusivo de un tercero, por rompimiento del nexo causal⁵.

Atendiendo los lineamientos jurisprudenciales, en el caso concreto se encuentra acreditado que el Soldado Regular Stivens Edurado Rodríguez Zuluaga, en desarrollo de actividades propias del servicio militar obligatorio, sufrió lesiones en su cuerpo que conllevaron a la disminución de su capacidad laboral. En consecuencia, se acredita la fuente obligacional en cabeza de la entidad convocada para con los convocantes, concretamente en el pago de los daños y perjuicios causados con ocasión de la afección sufrida por el soldado regular.

En el caso bajo estudio, le fueron reconocidos los perjuicios generados a la víctima directa, Stivens Edurado Rodríguez Zuluaga, como consecuencia de la pérdida de capacidad laboral, mientras prestaba el servicio militar obligatorio.

Ahora bien, se tiene que para la configuración de responsabilidad por parte del Estado, debe acreditarse que exista un daño que haya sido originado en el comportamiento de la entidad a la cual se le imputa la ocasión del mismo.

Así las cosas, se encuentra probado que el Soldado Regular Stivens Edurado Rodríguez Zuluaga, el día **25 de julio de 2018**, fecha en la que

Administración de sometimiento del soldado conscripto a una carga mayor a la que estaba obligado a soportar, cuando en el cumplimiento de la misión conferida a él por el Comandante del Escuadrón B de Contraguerrillas de registro del área general del Municipio de Paz de Ariporo dentro del servicio y con ocasión de él, se tropezó cayendo contra la maleza, lesionándose el ojo derecho".

⁴ En sentencia de 28 de abril de 2005, exp. 15.445, dijo la Sala: "En el tema de la responsabilidad patrimonial del Estado la jurisprudencia ha aplicado varios títulos jurídicos de imputación en relación a los conscriptos. Generalmente se acude al de daño especial cuando el "daño" tiene su causa en el rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas. Sin embargo cuando la causa de los daños se origina en otro tipo de hechos, según estos debe aplicarse el de falla probada cuando la irregularidad administrativa produjo el daño y el de riesgo cuando los conscriptos sufren daños con causa y por razón del servicio que provienen o de la realización de actividades peligrosas o de la utilización de artefactos que en su estructura son peligrosos...Ha partido de la regulación legal especial contemplada para la Fuerza Pública y en especial para los conscriptos, y ha concluido que cuando las pruebas son indicadoras de que los hechos ocurrieron por el riesgo a que fueron expuestos los conscriptos no se requiere realizar valoración subjetiva de conducta del demandado; que sólo es necesario demostrar: el ejercicio por parte del Estado de una actividad de riesgo en desarrollo del servicio militar prestado -o por su destinación o por su estructura-; el daño antijurídico; y el nexo de causalidad eficiente y determinante entre ese riesgo y el daño causado al conscripto; y que el demandado sólo se exonera por causa extraña, es decir por el hecho exclusivo del tercero o de la víctima y fuerza mayor".

⁵ CONSEJO DE ESTADO -SECCION TERCERA- Consejera ponente: RUTH STELLA CORREA PALACIO - 22 de abril de 2009. Radicación: 25000-23-26-000-1995-01600-01(18070)

fue diagnosticado con leishmaniosis, se encontraba prestando su servicio militar obligatorio.

Concluye el Despacho que las lesiones causadas al Soldado Regular Stivens Edurado Rodríguez Zuluaga, se produjeron en la prestación del servicio militar obligatorio: En consecuencia, recae en cabeza del Estado, la obligación de garantizar la integridad de los conscriptos, con el fin de ser devueltos a la sociedad en la condición en que ingresaron a la prestación del mismo, debiendo suministrar las medidas de protección a su integridad física, lo cual no sucedió en el caso bajo estudio.

6.-El acuerdo no debe contrariar la ley ni resultar lesivo para el patrimonio público.

Configurados los elementos de la responsabilidad administrativa en cabeza del Ministerio de Defensa en el asunto *sub examine*, que hacen procedente el reconocimiento de los perjuicios reconocidos por la entidad convocada, concluye el Despacho que el acuerdo conciliatorio no resulta contrario a la ley.

Igualmente, se tiene que la conciliación revisada no resulta lesiva para el erario público, habida cuenta que obedece a la reparación de los daños efectivamente causados al demandante, con ocasión de la afección y pérdida de capacidad laboral, causadas al Soldado Regular Stivens Edurado Rodríguez Zuluaga, y que conllevaron a la disminución de su capacidad laboral en un 10.5%, razón por la cual se presume el derecho a reclamar los perjuicios reconocidos. De esa forma, el acuerdo soluciona por esta vía un eventual juicio de responsabilidad administrativa, que a la postre le podría generar al Ministerio de Defensa Nacional, condiciones económicas mucho más onerosas, si llegara a resultar condenado por la jurisdicción.

Adicionalmente, los valores reconocidos al demandante en el acuerdo conciliatorio, se encuentran dentro de los parámetros establecidos por el H. Consejo de Estado respecto a los topes indemnizatorios para este tipo de eventos, y por los conceptos de daño moral y daño a la salud por lesiones -**Exp. 31172, M.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz**,⁶ en atención al porcentaje de pérdida de capacidad laboral determinado en el presente caso, en un 10.5%.

⁶Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de Unificación de 28 de agosto de 2014, MP. Enrique Gil Botero, Expediente 31170, y Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de Unificación de 28 de agosto de 2014, MP. Olga Mélida Valle de De la Hoz, Expediente 31172.

7.- Conclusión

Con fundamento en lo expuesto, concluye el Juzgado Sesenta y Cuatro (64) Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, que la conciliación judicial lograda entre las partes, cumple con los requisitos de forma y oportunidad anteriormente señalados y en tal virtud ha de impartirse aprobación a la misma con respecto a los perjuicios debidos a la parte convocante, por cuenta de la NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA –EJERCITO NACIONAL.

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, **el JUZGADO SESENTA Y CUATRO (64) ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.,**

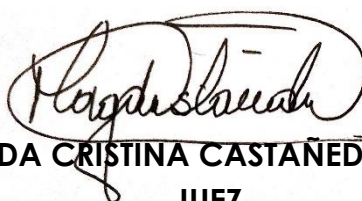
RESUELVE

PRIMERO.- APROBAR la conciliación judicial lograda entre las partes Stevens Edurado Rodríguez Zuluaga, y la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, en virtud de la cual, ésta última, le pagará al primero, las siguientes sumas de dinero, en los términos así establecidos en la certificación de la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del citado ministerio, de fecha 26 de febrero de 2021:

“PERJUICIOS MORALES: Para **STEVENS EDURADO RODRÍGUEZ ZULUAGA** en calidad de lesionado, el equivalente en pesos a **16 salarios Mínimos Legales Mensuales.**”

SEGUNDO.- Por Secretaría, expídase a las partes copias del acta de conciliación y de la presente providencia, conforme lo previsto en el numeral 2º del artículo 114 del Código General del Proceso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



MAGDA CRISTINA CASTAÑEDA PARRA
JUEZ